



## **ROMPER CON LA INCAPACIDAD Y LAS DEFICIENCIAS DE LA BUROCRACIA**

**Por: Dra. Eneida Torres de Durand  
Directora Ejecutiva  
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa**

La prosperidad y el bienestar de los países a nivel mundial ya no se mide únicamente por criterios económicos, aunque éstos continúan siendo fundamentales para promover el bien común. Las crisis prolongadas se están convirtiendo en la nueva pauta que experimentan los países a nivel mundial. Dada la persistencia de estas crisis es necesario desarrollar estrategias eficaces y sostenibles para superar las deficiencias de la burocracia y fomentar la capacidad de las instituciones para propiciar el desarrollo de los países.

Hoy día tanto la academia como las entidades internacionales han reconocido la calidad de la gobernanza como un factor clave para potenciar el desarrollo coherente y sostenible de los países. En su forma más general se puede decir que una democracia es gobernable cuando los gobernantes toman y ejecutan decisiones que son aceptadas por la ciudadanía. Los gobiernos tienen legitimidad cuando la población percibe que la clase política antepone sus intereses particulares al bien común y evalúa como eficaces las políticas públicas adoptadas para resolver los problemas que las afectan.

Puerto Rico tiene que trabajar duro para mejorar la calidad de la gobernanza para superar la crisis económica y social que nos aqueja. Los trabajos académicos y de los organismos internacionales que han estudiado y documentado con rigor las causas de las crisis experimentadas por los países a nivel mundial llegan a la conclusión de que existe un efecto causal positivo entre una mejor gobernanza, la prosperidad y el bienestar común de la sociedad.

Los pobres resultados alcanzados en la gestión pública y el acelerado deterioro del País de las pasadas décadas han tenido efectos paradójicos en la vida de los puertorriqueños. Por un lado, Puerto Rico se encuentra en una encrucijada sin precedentes en la que la sociedad demanda más y mejores servicios para renovar la calidad de vida de la población. No obstante, se han debilitado los lazos entre la gente y la calidad y riqueza de la vida de la “polis” vivida en tiempos pasados dando paso al deterioro de las instituciones públicas y su capacidad de generar resultados para potenciar el bien común de la sociedad.

En la coyuntura histórica actual la insatisfacción de la ciudadanía con la gestión y los resultados del nuevo gobierno, a sólo 60 días de su instalación, es señal evidente de que existe un malestar social que presenta una raíz común: la pérdida de confianza en las instituciones; el deterioro de la calidad de los servicios públicos; la pérdida de pertinencia social; las deficiencias de la burocracia y el debilitamiento de los vínculos políticos con las verdaderas necesidades de la sociedad.

El diagnóstico de la patología que padece el País es altamente conocido. Los problemas que vive el País son muchos y muy variados, desde el estancamiento económico, los elevados índices de desempleo y la baja participación laboral; la falta de generación de riqueza; la baja productividad; un sistema educativo desconectado de las necesidades productivas; un sistema de salud deficiente e incosteable; un sistema de pensiones al borde de la insolvencia que atenta con dejar desprovistos a nuestros jubilados de sus necesidades básicas y la precaria situación fiscal que amenaza con colapsar al País.

La principal disfuncionalidad detectada por los estudios de investigación realizados por el Centro de Gobernanza durante los pasados cinco (5) años es la falta de focalización y rigor en la articulación de las decisiones que se dan como parte de la progresiva politización lo que afecta la orientación de largo plazo de las políticas públicas en general en el País. Esto crea las condiciones para que los marcos jurídicos y normativos sean modificados, eludidos o distorsionados de acuerdo a los intereses de los grupos involucrados en los procesos de decisión con sus respectivos matices sectoriales y político-partidistas. La cultura burocrática que persiste en Puerto Rico es una de las menos coherentes y eficientes de los países a nivel mundial. Se suma a esto la alta volatilidad de las estructuras, el alto costo de la operación del aparato público y la alta tasa de rotación de los funcionarios políticos que cambian luego de cada proceso electoral, haciendo el entorno aún más inestable y costoso.

Todos estos síntomas de la enfermedad tienen una raíz común, la débil gobernanza de las pasadas décadas, cuyo centro de sus deficiencias lo podemos atribuir a múltiples causas: la alta politización, el inversionismo político, la corrupción y el deterioro de la calidad de nuestras instituciones. La realidad es que, aunque quisiéramos resolver todos estos problemas al unísono no es prácticamente posible ni estratégicamente viable. Unos problemas son de carácter apremiante y otros son importantes. No cabe duda, de que necesitamos atender y resolverlos todos, pero hay que focalizar en los más urgentes y

concentrarnos primero en aquellos cuya resolución nos permita añadir valor público, minimizar los riesgos y evitar profundizar más la crisis.

Max Weber, economista alemán, definía la burocracia como una organización basada en normas y procedimientos normalizados, donde cada individuo tiene su especialidad, su responsabilidad y su división de tareas. Weber introdujo, de acuerdo a muchos, el concepto al vocabulario académico moderno, basándose en el estudio de los sistemas de administración pública europeos continentales de su época. Para Weber la burocracia tiene una connotación positiva, en que es un sistema más racional que las modalidades anteriores de administración que basan la autoridad en las tradiciones o el carisma.

La palabra burocracia proviene de “buro” del francés “bureau” que en español quiere decir escritorio y “cracia” del griego “crato” que significa poder. Es decir, que los funcionarios públicos ejercen el poder desde la autoridad del cargo que ocupan. Hoy día nuestra burocracia pública es altamente disfuncional y costosa. En el Puerto Rico de nuestros tiempos las competencias profesionales de los funcionarios públicos han sido cuestionadas ya que su peritaje profesional y técnico no necesariamente ha sido el criterio para su selección en el cargo sino que ocupan el cargo por su afinidad político-partidista. El deterioro del sistema de mérito en el servicio público es un factor que inhibe las prácticas de buen gobierno y sana administración pública para adelantar las reformas que reclama el País.

Esta disfuncionalidad fue magistralmente trabajada por Mario Moreno “Cantinflas” en su discurso sobre la democracia en el filme *El ministro y yo* ([Insert Enlace](#)). En esta película el personaje de Cantinflas reafirma la importancia de que la democracia es una forma de gobierno del pueblo y para el pueblo y que los funcionarios públicos deben ser responsables y rendir cuentas por los resultados de su gestión. El verdadero poder reside en el pueblo que a través de sus contribuciones paga sus sueldos, sus vacaciones y sus jubilaciones.

Por su parte, el deterioro de la capacidad de las instituciones de las pasadas décadas ha sido un factor determinante en la debilidad de la gobernanza. La capacidad institucional se refiere a la habilidad administrativa y de gestión de un país sobre todo en lo que respecta a la aplicación de políticas económicas y sociales; la eficacia para planificar, resolver problemas y priorizar la prestación de servicios a la ciudadanía; la prudencia, la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos; la habilidad de los organismos públicos para transparentar información y rendir cuentas por los resultados; y la competencia del gobierno para integrar y relacionarse con actores diversos de la sociedad incluyendo el sector privado, la academia y la ciudadanía en general para adelantar las reformas que requiere la sociedad.

Sin embargo, existe consenso al día de hoy de que el gobierno continúa improvisando políticas públicas contradictorias, inconexas e incoherentes que no atienden los verdaderos problemas que enfrenta el País. Si queremos producir las reformas necesarias exigidas por la realidad actual, es indispensable optar por fortalecer la cultura de buen gobierno para atender los desafíos económicos, fiscales y sociales que vivimos. Las crisis prolongadas son uno de los contextos más difíciles en los que se lucha contra la corrupción, la negligencia, la incompetencia y la incapacidad de los gobiernos. Estas

crisis están determinadas por causas recurrentes como factores provocados por la falta de cohesión social generada por la desconfianza en los gobiernos de turno, el deterioro de las instituciones, el uso negligente de los recursos públicos y la corrupción.

Al presente, vuelve a repetirse la insatisfacción pública de las pasadas décadas con el desempeño y los resultados alcanzados por los gobiernos muy especialmente con su incapacidad de generar desarrollo económico que promueva la generación de riqueza, la creación de empleos y el bienestar de la sociedad. El gobierno recién electo sigue perpetuando la mala práctica de que el partido político y la administración del aparato público son la misma cosa. Esta disfuncionalidad no permite que los mejores candidatos le sirvan al gobierno y que personas de todas las ideologías políticas se involucren en el proceso de gobernar. Además, es terreno fértil para engendrar la corrupción. Mejorar la gobernabilidad y contribuir a sacar el país hacia adelante requiere compromiso y voluntad para superar la negligencia, la incapacidad y la incompetencia en la gestión de los asuntos públicos de las pasadas décadas.

De igual forma, es tiempo de que los ciudadanos se involucren activamente en el proceso de gobernar y fiscalizar a sus gobernantes. En la democracia las elecciones son un instrumento para seleccionar políticos de probidad y competencia intachable cuyo objetivo central es servir al País en beneficio de la gente. Su función va más allá de las elecciones, los ciudadanos informados en la democracia de nuestros tiempos deben involucrarse en la solución de los problemas que les aquejan y en la toma de decisiones de las acciones a implantar.

Para promover la gobernabilidad es necesario que gobernantes y ciudadanos cogobiernen para añadir valor público. Los nombramientos recientes del nuevo gobierno de políticos derrotados y funcionarios de reputación cuestionable sólo abonan a aumentar la desconfianza en la gestión de los asuntos públicos, aumentan los riesgos y el deterioro de la capacidad de nuestras instituciones. No podemos continuar permitiendo que los menos aptos que vienen a servirse del gobierno ocupen el campo. Al igual que es necesaria la involucración y la fiscalización de los ciudadanos como parte de su responsabilidad primaria en la democracia. Generar prosperidad y calidad de vida en los tiempos difíciles que enfrenta el País va a requerir que trabajemos todos al unísono en adelantar la cultura de buen gobierno necesaria para gobernar en gobernanza.